

CENTROAMÉRICA Y LA AGENDA 2030: DESAFÍOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 16

Stella Sáenz Breckenridge y Esteban Zolezzi

10 de diciembre de 2019

En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) queda clara la importancia del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16) dedicado a la paz, la justicia y las instituciones sólidas, al establecer que “sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible” (PNUD, 2019). La violencia, la inseguridad, la corrupción y la falta de un Estado de derecho son las principales barreras para el cumplimiento de este ODS en Centroamérica y dejan atrapadas a sus sociedades en un ciclo que no les permite lograr el desarrollo inclusivo y sostenible. Para esta subregión, la necesidad de cumplir con el ODS 16 tiene una relevancia crucial. Este texto analiza la situación socioeconómica e institucional de Centroamérica y examina sus efectos sobre los indicadores del ODS 16. El trabajo subraya la prioridad política que hay que conceder a este ODS y la necesidad imperativa de alcanzar sus metas en consonancia con un plan acotado a la realidad centroamericana, que permita afianzar sus bases institucionales.

De acuerdo con los datos para 2018 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 33% de la población de Centroamérica vive por debajo del umbral de la pobreza y el ingreso del 10% más rico es 10 veces mayor al del 10% más pobre. En la subregión, además, únicamente la mitad de la población tiene un suministro de agua no contaminada y solo el 67% accede al agua sin problemas de intermitencia. A la vez, la población trabajadora en riesgo de perder su empleo debido a los procesos de automatización supera el 60%, el acceso a la educación secundaria se limita al 62% y la penetración de internet llega solo al 44% (BID, 2018). Estos datos expresan la vulnerabilidad social de la subregión, a la que se agregan factores globales como el aislamiento comercial ante sus principales socios —Estados Unidos (EE.UU.) y una Unión Europea marcada por el *Brexit*—, los efectos de la Cuarta Revolución Industrial o el impacto del cambio climático sobre la producción alimentaria y, por extensión, sobre la salud.

Para enfrentar estos problemas, Centroamérica requiere una institucionalidad sólida, perfeccionar sus sistemas de acceso a la justicia y establecer un mínimo de garantías para mantener la paz social; de ahí que el ODS 16 sea uno de los objetivos de la Agenda 2030 prioritarios para la subregión. Y es que, si no se avanza hacia el ODS 16, se hace prácticamente inviable lograr los propósitos de desarrollo que plantea el PNUD.

Pese a que los problemas citados están presentes desde hace décadas, apenas se han mejorado las condiciones toda vez que Centroamérica ha estado sumida en un ciclo de vaivenes políticos y económicos, en los que se han encadenado democracias y dictaduras, modelos de desarrollo social y modelos de desarrollo neoliberal, y estrategias de política exterior aperturistas y aislacionistas. Durante todo este tiempo, la subregión ha arrastrado altas tasas de desigualdad y pobreza, y una constante presencia de la corrupción y la violencia. En los últimos años, los problemas de institucionalidad han desembocado en el estallido de diversos casos de corrupción y protestas sociales, que han forzado la renuncia de varios presidentes y el procesamiento de un elevado número de cargos públicos. Cabe recordar los casos de los expresidentes de Honduras (Porfirio Lobo) y Panamá (Ricardo Martinelli).

Más recientemente, el caso del hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, capturado en EE.UU. en 2019, ha generado movilizaciones contra las autoridades, las cuales reflejan el descontento y la desafección de la sociedad hacia sus instituciones (BBC, 2019). Durante el juicio, la fiscalía afirmó que, según los testimonios de algunos exnarcotraficantes: “Hernández participó durante años del tráfico de cocaína, operando con total impunidad gracias a la protección de su hermano Juan Orlando, contribuyendo a la putrefacción de las instituciones de Honduras”. No obstante, el acusado está protegido por el presidente, quien ha recibido millones de dólares en sobornos, incluso de (Joaquín) “El Chapo” Guzmán, lo que da cuenta de la crisis que atraviesa el país.

La sombra del narcotráfico y del crimen organizado en los ámbitos político y económico, además de su presencia territorial, ha generado un nuevo tipo de violencia en la subregión, a menudo acompañada de impunidad. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) advirtió en 2017 que Centroamérica es la zona sin conflictos bélicos más violenta del mundo, llegando a alcanzar en algunos territorios los 62,1 homicidios por cada 100.000 personas (UNODC, 2019: 17).

La creciente desconfianza de la población hacia las instituciones y el sistema político ilustra la incapacidad del Estado para dar respuesta a las demandas ciudadanas y posibilitar el desarrollo de la subregión. De acuerdo con los datos del Latinobarómetro (2019), a excepción de Costa Rica, solo el 50% o menos de la población centroamericana confía en la democracia, cifra que desciende al 28% en Honduras y El Salvador. Más aún, ningún país registra una satisfacción mayor del 28% hacia ese sistema, exceptuando nuevamente a Costa Rica. Además, la percepción general sobre el aumento de la corrupción supera el 50% (Corporación Latinobarómetro, 2019: 62). Por lo demás, los altos niveles de abstencionismo electoral plasman, asimismo, la debilidad institucional en Centroamérica.

Por otra parte, la presencia histórica de EE.UU. en Centroamérica ha marcado el rumbo de esos países. La política estadounidense de “guerra contra las drogas”, acompañada de la donación de armamentos para la lucha contra el narcotráfico, ha terminado por militarizar la subregión. Asimismo, se produce una constante intervención de EE.UU., tanto en los procesos judiciales contra los narcotraficantes —mediante solicitudes de extradición y cambios en las políticas migratorias—, como en el modelo económico —por la influencia de los acuerdos comerciales y la actividad de sus empresas—, que debilita aún

más las capacidades autónomas de la subregión (Grandin, 2006).

A tenor de lo dicho, ¿cómo es posible cumplir el ODS 16 y generar políticas de largo plazo que se ejecuten y puedan evaluarse de forma confiable y constante? De acuerdo con el escenario que vive Centroamérica, conviene precisar qué metas de este ODS han de priorizarse.

Hacia el cumplimiento del ODS 16

Al analizar la situación de las metas del ODS 16 —sobre reducción de la violencia, disminución de la corrupción, fortalecimiento institucional, o combate contra el crimen organizado—, es necesario revisar el efecto de uno de los principales problemas de la subregión, ya citado: el narcotráfico. Centroamérica es zona de paso en el tráfico de drogas, realidad que ha venido obstruyendo estructuralmente toda mejora y manteniendo tasas muy altas de violencia, homicidios y corrupción en la esfera pública. Sin embargo, el efecto directo del narcotráfico en los índices de desarrollo resulta difícil de medir, puesto que los indicadores que se emplean no segregan su impacto, lo que, a su vez, hace todavía más complicado el diseño de políticas públicas adecuadas y eficaces.

Además, la política de EE.UU. ante el tráfico de drogas ha permeado la institucionalidad regional. Su enfoque de seguridad, basado en la criminalización del narcotráfico y en la

militarización de los cuerpos policiales —por medio de incautaciones, capturas, extradiciones y donativos armamentistas—, ha debilitado las capacidades de los países centroamericanos para activar políticas de prevención orientadas a los grupos vulnerables y favorecer su acceso a la justicia. Así, el enfoque securitario no solo no ha reducido los índices de violencia, homicidios y corrupción, sino que tampoco ha logrado que la ciudadanía pierda el miedo a salir a la calle y ser objeto de delitos o actos de violencia. Ante este escenario, es preciso fortalecer la institucionalidad pública —impulsando la colaboración con las comunidades sobre el terreno—, y reducir la dependencia respecto de actores extrarregionales, como EE.UU. En consecuencia, hay que evitar militarizar la subregión y criminalizar a la población, revirtiendo la situación de vulnerabilidad de la que se aprovecha el narcotráfico.

De hecho, para adoptar políticas públicas más inclusivas y eficaces, se han de desarrollar mecanismos de decisión participativos y transparentes que involucren a los sectores sociales más vulnerables (mujeres, jóvenes, menores, poblaciones indígenas, LGBTI+). No obstante, pese a los esfuerzos realizados en la promoción de políticas no discriminatorias —para ampliar la representación de estos sectores en los ámbitos nacional y regional—, las desigualdades persisten. De ahí que, en términos de

desarrollo social, sea imprescindible contar con instituciones robustas y confiables, que permanezcan en el tiempo y consoliden los progresos en el largo plazo. Solo así se podrán reencauzar los recursos y programas hacia el ODS 16. Por otra parte, el fortalecimiento institucional pasa por ensanchar la participación de los países centroamericanos en organismos de gobernanza y cooperación internacional. En este sentido, hechos como la suspensión en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) que —por mandato de Naciones Unidas— investigaba desde 2007 casos de corrupción en el país, ilustran la inconsistencia de los esfuerzos.

En paralelo, la subregión ha de perfeccionar las herramientas de selección y clasificación de datos y la objetividad de los registros que recaban los organismos gubernamentales. En términos de implementación y medición del ODS 16, se hace preciso contar con mecanismos de seguimiento y evaluación acreditados e independientes (Figuroa, 2017), que además sean de acceso público. En esta línea, la elaboración de Planes Nacionales de Desarrollo que supervisan al cumplimiento de los ODS refleja los esfuerzos acometidos para que las normativas progresen hacia las metas definidas. Estos planes se han puesto en práctica, por ejemplo, en Costa Rica, donde el “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión

Pública del Bicentenario 2019-2022” vincula las intervenciones estratégicas con las metas de los ODS. Otro caso reseñable lo representa El Salvador, país que implementó en junio de 2018 un sistema informático para el monitoreo de sus proyectos y programas gubernamentales encaminados al cumplimiento de los ODS. Este sistema contribuye a la transparencia, puesto que la información de su plataforma digital —en la que se constatan los avances de tales proyectos— está al alcance de la ciudadanía (Infosegura, 2018).

Además, en el plano subregional, se ha articulado la Alianza Regional Estratégica Infosegura, coordinada por el Buró Regional para América Latina y el Caribe del PNUD y financiada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Esta alianza gestiona información basada en evidencias con el fin de fortalecer la formulación de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y controlar su seguimiento en Centroamérica. Su finalidad es mejorar el tratamiento de datos sobre seguridad ciudadana y promover su uso analítico para la gestión, coordinación y colaboración regional de estrategias estatales de seguridad (Infosegura, 2019). Esta iniciativa, además, se ha aplicado directamente en la supervisión de los avances hacia el ODS 16, ofreciendo insumos al servicio de la política pública y reforzando las capacidades

y los espacios de articulación inter-institucional en los ámbitos nacional y regional.

Conclusiones y acciones prioritarias para Centroamérica

La Agenda 2030 subraya la necesidad de vivir en sociedades libres de violencia, no solo por respeto a los derechos humanos, sino también como punto de partida para el progreso social, la mejora de la calidad de vida y la construcción de sociedades inclusivas, que aseguren el acceso a la justicia para todas y todos. Así, el ODS 16 en Centroamérica representa el pilar esencial para generar entornos seguros y garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Como afirmó el secretario general de Naciones Unidas en 2005: “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas ninguna de ellas podrá triunfar” (cit. en Sanahuja, 2019: 37).

Ante esto, según se ha indicado, es preciso contar con mecanismos transparentes y datos contrastados que muestren la verdadera radiografía multidimensional de los países de la subregión en aras de dar continuidad al cumplimiento efectivo de los ODS. En Centroamérica se han realizado muchos esfuerzos, pero aún es indispensable perfeccionar los instrumentos de información y segui-

miento, y contar además con la visión y contribución activa —para la definición de acciones y metas— de actores clave de la sociedad civil y del sector privado.

En este sentido, es necesario abrir espacios de interlocución orientados a la definición de estrategias, implementación de iniciativas y evaluación crítica del trabajo que se está emprendiendo. Ciertamente, se han logrado algunos progresos en ciertos indicadores del ODS 16, pero debido al escenario regional los avances son lentos, aparte de que urge replantear el enfoque en el ámbito de la violencia y su criminalización. Se debe dar paso a tratamientos preventivos atentos a las consecuencias de la violencia sobre la sociedad y a las maniobras que emplea el crimen organizado para aprovecharse de su vulnerabilidad. Estos enfoques deben estar presentes en las políticas que planifican y ejecutan los Estados para combatir la violencia y proteger los derechos de la población. Con todo, nada de esto se puede conseguir sin el concurso de un aparato estatal sólido, transparente y eficaz, que cuente con datos actualizados sobre el impacto de las políticas públicas orientadas al desarrollo y ofrezcan seguimiento sobre las mejoras en clave de equidad e inclusividad.

En definitiva, es necesario establecer alianzas estratégicas, tanto público-privadas, como entre los organismos internacionales especializados en

desarrollo social. El debate público y la generación de conocimientos asociados a la innovación tecnológica son esenciales para disponer de una información que contribuya al diseño de políticas públicas encaminadas a cumplir con los ODS.

Stella Sáenz Breckenridge es directora de investigación de FLACSO - Secretaría General, y Máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Esteban Zolezzi es investigador sénior de FLACSO - Secretaría General. Tiene un Máster en Administración Pública por la Universidad de Michigan y es MBA con énfasis en Finanzas y Desarrollo Sostenible por el INCAE Business School.

Referencias bibliográficas

- BID (2018): *El Grupo BID en el Istmo Centroamericano y la República Dominicana*. Disponible en: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El_Grupo_BID_en_el_Istmo_Centroamericano_y_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana_Informe_de_actividades_2018_es_es.pdf.
- BBC (2019): “Protestas en Honduras: el caso que reavivó las masivas y violentas manifestaciones en contra del presidente Juan Orlando Hernández”, *BBC Mundo*. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49268318>.
- COYNE, C. J. y ABIGAIL R. H. (2017): *Four decades and counting. The continued failure of the war on drugs*, Cato Institute. Disponible en: <https://www.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa-811-updated.pdf>.
- CORPORACIÓN LATINOBARÓMETRO (2019): *Informe Latino-barómetro 2018*, Santiago – Chile. Disponible en: <http://www.latinobarometro.org/lat.jsp>.
- FIGUEROA, M. (2017): “Erradiquemos la pobreza, protejamos el planeta y aseguraremos la prosperidad para todos”, Santiago, Reporte regional sobre la implementación del ODS 16 en las Américas. Disponible en: <http://www.repo.funde.org/1318/1/R-ODS-Es.pdf>.
- GRANDIN, G. (2006): *Empire's workshop: Latin America, the United States, and the rise of the new imperialism*, Nueva York, Henry Holt and Company.
- INFOSEGURA (2018): “El Salvador ahora cuenta con herramienta para monitorear avances en cumplimiento de ODS”. Disponible en: <https://www.infosegura.org/2018/07/05/el-salvador-ahora-cuenta-con-herramienta-para-monitorear-avances-en-cumplimiento-de-ods/>.
- PNUD (2019): *Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas*, Nueva York. Disponible en: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html>.

SANAHUJA, J. A. (2019): “La Agenda 2030 y los ODS: sociedades pacíficas, justas e inclusivas como pilar de la seguridad”, en: *La Agenda 2030 y los ODS. Nueva arquitectura para la seguridad*, Madrid, Gobierno de España.

UNODC (2019): *Global Study on Homicide 2019. Homicide trends, patterns and criminal justice response*, Viena. Disponible en <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html>.

Fundación Carolina, diciembre 2019

Fundación Carolina
C/ Serrano Galvache, 26.
Torre Sur, 3ª planta
28071 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
@Red_Carolina

ISSN: 2695-4362
https://doi.org/10.33960/AC_31.2019

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)